



MTRO. LIC. MARIANO RAMIREZ VAZQUEZ.
SRIO. Lic. ANTONIO VAZQUEZ CONTRERAS.

AMPARO DIRECTO
3226/957/2a.

RODRIGO ALBARRAN Y J. LEONOR SANCHEZ.

México, Distrito Federal, Acuerdo de la --
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na--
ción, correspondiente a la sesión del día nueve de febre
re de mil novecientos cincuenta y nueve.

Vo. Bo.

V I S T O el juicio de amparo directo núme--
ro tres mil doscientos veintiseis, de mil novecientos --
cincuenta y siete, promovido por Rodrigo Albarrán y J.
Leonor Sánchez, contra el acto que reclama de la Prime--
ra Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
México, que estimó violatorio de los artículos 14 y 16
constitucionales, y que hizo consistir en la sentencia
pronunciada en el toca a la apelación del juicio ordina--
rio civil seguido por Paz Nava viuda de Rojas, en con--
tra de los quejosos y Florentino Arriaga; y,

R E S U L T A N D O :

PRIMERO.- Los antecedentes del caso son --
los siguientes:

Por escrito fechado el día seis de diciem--
bre de mil novecientos cincuenta y cuatro, Paz Nava viu--
da de Rojas demandó ante el Juez de Primera Instancia,
de Toluca, Mex., de Florentino Arriaga, J. Leonor Sán--
ches y Rodrigo Albarrán, la restitución de un terreno y
parte de una casa en él construida, de la que fué despo--
jada por los demandados a principios de febrero de di--
cho año; que se le mantenga en la posesión de la otra --
parte de la casa que aun conserva; el pago de daños, --
perjuicios y costas, y que se afiance la abstención de --

perturbar la posesión. Expuso, que el veintisiete de febrero de mil novecientos diecinueve contrajo matrimonio eclesiástico con José Rojas, según quedaba acreditado con la copia certificada del acta relativa, cotejada por notario; desde hacía más de quince años adquirieron ella y su esposo la propiedad de cinco fracciones de terreno, que formaron una sola y se conoce con el nombre de "Los Alamos", con las medidas y colindancias que precisó, ubicado en "Barrio de Rojas" del Municipio de Capulhuac del Distrito de Toluca, Mex, también construyeron en el terreno una casa de adobe, con ocho cuartos, cocina y corral; a la muerte de su esposo, acaecida el veinte de octubre de mil novecientos treinta y cinco, continuó en la posesión pacífica y pública del inmueble, y como ha sido a título de dueño, la posesión es apta para prescribir; al fallecimiento de su esposo siguió viviendo en el predio con Loreto Rojas, que fué su suegra; las contribuciones prediales se pagaron a nombre de José Rojas y después al de Loreto Rojas, a pesar de que ésta falleció el seis de marzo de mil novecientos cincuenta y dos; a principios de febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro los demandados la despojaron del predio y de la casa; parte de ésta la ocupó Florentino Arriaga; el terreno lo sembró J. Leonor Sánchez, y Rodrigo Albarrán se llevó el mobiliario y los recibos de pago de contribuciones; fundan la demanda, entre otros, los artículos 790, 794, 798, 801, a 804, 806, 811, 823 y 827 del Código Civil y 489 del de Procedimientos Civiles.

Rodrigo Albarrán al contestar la demanda -
la negó en todas sus partes y opuso la defensa de sine -



3226/957/2a. (34)

- 3 -

actione agis. Expuso, que debe ser cierto que la actora contrajo matrimonio con José Rojas, pero no puede tomarse en cuenta el acta de su matrimonio eclesiástico, porque el estado civil de las personas sólo se comprueba con las constancias relativas del registro civil, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley; es falso que José Rojas y la demandante adquirieron los terrenos que forman el predio "Los Alamos", -- pues ningún documento se exhibió con la demanda; es -- asimismo falso que la actora y su esposo poseyeran el predio de que se trata y tal vez la señora viuda de Rojas se refiera a otro terreno de idéntico nombre al que adquirió Manuel Albarrán, quien siempre tuvo la posesión y el trece de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres, hizo testamento que se elevó a solemne en el Juzgado de Primera Instancia de Toluca, Mex., -- instituyendo heredero a Rodrigo Albarrán; la actora, en su carácter de legataria, denunció la testamentaría de Manuel Albarrán, por lo que debió oponerse a la declaración de solemne del testamento del autor de la herencia, lo que seguramente no hizo por no tener derecho sobre el predio "Los Alamos"; las contribuciones prediales las pagaba Manuel Albarrán, aun cuando el inmueble estaba ya registrado fiscalmente a nombre de Loreto Rojas; y Leonor Sánchez se dió cuenta, por haber sido testigo en el testamento de Manuel Albarrán, que éste dispuso que los inmuebles ubicados en el "Barrio de Rojas" se le quedaran a Rodrigo Albarrán, quien en julio de mil novecientos cincuenta y cuatro dió a dicho señor Sánchez el terreno "Los Alamos", a medias, para la siem

- 4 -

bra de avena; Florentino Arriaga entró a poseer la casa ubicada en el terreno, con objeto de cuidarla, el veintisiete de octubre de mil novecientos cincuenta y tres, por encargo de Rodrigo Albarrán.

Florentino Arriaga y J. Leonor Sánchez también negaron la demanda en todas sus partes, opusieron la defensa de sine actione agis y relataron los mismos hechos expuestos por Rodrigo Albarrán.

El día veintiuno de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis el Juez dictó sentencia con los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO.- La parte "actora probó la acción ejercitada en este juicio; por "lo tanto, SEGUNDO.- Se condena a los demandados Rodrigo Albarrán, J. Leonor Sánchez y Florentino Arriaga a "la restitución del terreno denominado "Los Alamos" y "casa en él construída, ubicados en el paraje "Barrio de "los Rojas", municipio de Villa Cuauthémoc, de este Distrito, a la señora Paz Nava viuda de Rojas.- TERCERO.- Se "previene a los mismos demandados que deben abstenerse "de perturbar a la actora en la posesión de los inmuebles de referencia, a cuyo efecto deberán otorgar una "fianza por la suma de dos mil quinientos pesos, en cualquiera de las formas que la ley señala, en sus disposiciones relativas.- CUARTO.- No se hace especial condenación en costas; cada parte cubrirá las que hubiere "erogado en la tramitación de este juicio.- QUINTO.- No "tiffíquese".

SEGUNDO.- Inconformes con dicho fallo, interpusieron apelación Rodrigo Albarrán y J. Leonor Sánchez, y previa la sustanciación del recurso, el día vein



tisiete de marzo de mil novecientos cincuenta y siete -- pronunció sentencia la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, confirmándola y condenó en costas de ambas instancias a los apelantes. Es la que constituye el acto reclamado.

TERCERO.- La demanda de amparo, presentada en tiempo, fué remitida al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito para el conocimiento de las violaciones de procedimiento hechas valer, consistentes substancialmente, en que el Juez revocó el auto en que había tenido -- por rendidas las pruebas documentales que ofrecieron -- los demandados, y en que al practicarse el reconocimiento o inspección ocular ofrecido como prueba por la actora, se cambió radicalmente la finalidad de la probanza; se negó el amparo respecto de dichas violaciones. Recibido el juicio en esta Suprema Corte, se admitió la demanda el día once de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho; la autoridad responsable rindió su informe justificado. El Ministerio Público se abstuvo de intervenir por considerar que el caso carece de interés público. -- El negocio se turnó al relator por acuerdo del día ocho de mayo siguiente, notificado el día doce del propio mes.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- La existencia del acto reclamado quedó comprobada con el informe justificado de la autoridad responsable y los autos originales de ambas instancias que remitió.

SEGUNDO.- Los quejosos expresan como conceptos de violación, respecto al fondo del negocio:

I.- La autoridad responsable infringió el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, por que declaró improcedente el primer agravio expresado en la apelación, consistente en que el juez estimó que debía estudiar ante todo, la excepción opuesta por los demandados, por ser de las que no destruyen la acción, "aceptando el error de redacción contenido en dicho -- "precepto (el artículo 210 del Código de Procedimien-- "tos Civiles), puesto que en rigor jurídico y como pue "de verse de la relación lógica del contenido de este "artículo, al dictarse una resolución debe estudiarse "ante todo las excepciones que destruyen la acción, in- "curriendo asimismo en el error de estimar como una ver "dadera excepción, la defensa de sine actione agis que "hicieron valer". La autoridad responsable argumentó, - para desestimar el agravio, que dicho artículo 210 apa- rece con una redacción ambigua, porque se refiere a dos clases de excepciones que debe estudiar el juzgador, - primero las dilatorias que destruyen la acción, y en - caso de que se declare una de ellas procedente, se abs- tendrá de entrar al fondo del negocio, pero el precepto se refiere, sin duda, según la responsable, también a - las excepciones perentorias, que si estudiadas previa- mente, destruyen la acción, es innecesario examinar és- ta; pero, agregó, en el fallo apelado, el juez examinó la acción ejercitada por la señora Nava viuda de Rojas, aun cuando la clasificó como excepción, y los conside- randos y argumentos de una resolución, no agravan al - afectado, si no acarrean también puntos resolutivos con- trarios al derecho que se defiende; con esta conclusión.



- 7 -

la responsable infringió el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles y dejó de estudiar el fondo del agravio; insiste en que el juez debió, primero, examinar si la actora había probado su acción, porque como se opuso la defensa de sine actione agis, a ella correspondía justificar plenamente los extremos de dicha acción.

II.- En la sentencia reclamada se violaron los artículos 804 del Código Civil, 490 del de Procedimientos Civiles, porque declaró improcedente el -- agravio consistente en la violación de dichos artículos, por cuanto a que el Juez, estableció que la actora probó su acción, sin ser así, porque no demostró -- los elementos de la misma, que son: a), que haya sido o sea propietaria de los inmuebles reclamados; b), que haya estado en posesión de éstos; c), que se le despojó arbitrariamente de los mismos bienes y d), que se ejercite la acción, antes de transcurrido un año, con-- tado a partir de la fecha del despojo; la señora Nava -- viuda de Rojas únicamente afirmó en su demanda, que a -- principio de febrero de mil novecientos cincuenta y cua -- tro fue cuando se le privó de la posesión del terreno y parte de la casa en él construida, sin demostrarlo, por -- que los testigos no precisaron la fecha en que Florenti -- no Arriaga entró a poseer una parte de la casa, ni cuan -- do J. Leonor Sánchez principió a sembrar el predio, y -- menos aún, desde cuándo principió Rodrigo Albarrán a po -- seer el terreno y la casa; sus pruebas sólo acreditan -- que tiene la posesión de una parte de la casa, como así -- es, y nunca han tratado de quitarle dicha parte; en cam --

bio, las de los demandados demuestran que al fallecimiento de Manuel Albarrán, acaecido el doce de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres, Rodrigo Albarrán entró en posesión de los bienes reclamados, pues sus testigos contestaron a la novena pregunta del interrogatorio, que sabían y les constaba que dicho Rodrigo recogió la cosecha de "Los Alamos" en mil novecientos cincuenta y tres, por lo que quedó de manifiesto lo inoportuno del ejercicio de la acción, puesto que cuando promovió el juicio, había transcurrido el año que concede el artículo 804 del Código Civil para la promoción del interdicto de recuperar posesión. Para el desechamiento del agravio, la responsable incurrió en el mismo error del juez, de valorizar primero las pruebas de los demandados, como si se hubiese cruado excepción, y admitió la misma valorización de la sentencia apelada; pero, objetan los quejosos, Rodrigo Albarrán confesó en la demanda, al absolver posiciones y en la inspección ocular, que la actora está en posesión de una parte de la casa, mas no afirmó que también haya poseído la otra parte y el terreno; J. Leonor Sánchez manifestó en la confesional, que a partir de febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro principió a poseer el predio, pero esta circunstancia no implica que desde entonces comenzó la posesión de Rodrigo Albarrán, pues la de éste se inició el doce de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres, al fallecimiento de su hermano Manuel. Las pruebas de los demandados justifican, además de la inoportunidad del ejercicio de la acción, que "Los Alamos" fué poseído



- 9 -

por Loreto Rojas de Albarrán y Manuel Albarrán; que a la muerte de aquélla, éste continuó la posesión y dejó como único heredero a su hermano Rodrigo, quien cosechó el terreno en mil novecientos cincuenta y tres. La Sala responsable consideró, respecto a la prueba testimonial de la actora, que aunque los testigos dejaron de contestar preguntas de carácter técnico, relativas a la posesión, el hecho substancial de ésta y el despojo, sí fue debidamente declarado; y agregó, - que Paz Nava viuda de Rojas demostró que los bienes en disputa estuvieron en posesión de José Rojas y después pasaron a ella, que es la que paga las contribuciones prediales, por lo que queda justificada su posesión y el despojo por los demandados, dentro de un año anterior a la fecha de la demanda, según el debido examen que de las pruebas hizo el juez, y hay que concluir que la actora cumplió los extremos de los artículos 804 del Código Civil y 490 del de Procedimientos Civiles; pero, argumentan los quejosos, la señora Nava viuda de Rojas no comprobó que hubiera estado en posesión del predio y parte de la casa, cuya restitución reclama, ni que los demandados la despojaron y - menos que ejercitó la acción dentro del año contado a partir del despojo, de acuerdo con las anteriores razones, que reiteran; y en el supuesto que haya tenido la posesión, ésta sería a ruego, porque así se desprende de los recibos de pago de contribuciones que la actora aportó, por estar a nombre de Loreto Rojas; todas las probanzas ponen de manifiesto que la demandante posee únicamente una parte de la casa construida en "Los Alamos".

III.- Violó la responsable ~~el~~ artículo 409 del Código de Procedimientos Civiles porque concedió eficacia probatoria, como lo hizo el Juez, a la diligencia de reconocimiento o inspección ocular, rendida por la actora, no obstante que al practicarla, se cambió radicalmente su objeto.

IV.- Infringió la Sala ~~el~~ artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles al desestimar la impugnación de los apelantes a la valorización que hizo el juez, de la prueba testimonial de los demandados, la que tuvo por objeto acreditar que Rodrigo Albarrán posee los bienes relacionados con el juicio, a partir de mil novecientos cincuenta y tres; igual que el a--quo, la responsable negó valor demostrativo a tal--prueba, aduciendo que no es la testimonial ~~apta~~ para justificar la propiedad, cuando que el objeto fué el citado, como lo evidencia la pregunta novena del interrogatorio; además, Rodrigo Albarrán entró a poseer los bienes a que se refiere la actora, por ministerio de ley, de acuerdo con el artículo 1704 del Código Civil, desde la fecha del fallecimiento de su hermano Manuel, por lo que no puede haber el despojo que ella alega; no se pretendió probar nada sobre propiedad, porque la acción ejercitada debe versar sobre posesión únicamente, aunque tratando de fundar el origen de la posesión adquirida por Rodrigo Albarrán, se ofreció la prueba documental que se desechó; tampoco hay ~~contra~~dicción entre la respuesta de los testigos a la pregunta sexta del interrogatorio y lo dicho en la contestación de la demanda, porque la posesión a que aluden se



refiere a diverso tiempo y personas, y suponiendo -- existente la contradicción, impere el valor demostrativo de la confesión en la contestación.

V.- Violó la responsable el artículo 283 del Código de Procedimientos Civiles, con la desestimación del sexto agravio, aduciendo que es repetición del anterior; pero con la valorización de las pruebas, unas frente a las otras, más la documental que se desechó y pudo tomarse en consideración de -- acuerdo con la facultad del artículo 267 de la ley procesal citada, se llega a la conclusión de que los bienes en litigio, fueron poseídos, sucesivamente, por Manuel y Rodrigo Albarrán, y que la actora carece de derecho para demandar la restitución, máxime que ejerció la acción fuera del año que para el efecto concede la ley.

La responsable infringió los artículos 386 y 389 del Código de Procedimientos Civiles, al afirmar que el Juez hizo valorización correcta de la confesión de los demandados. Si bien Rodrigo Albarrán reconoció en la contestación de la demanda y en la inspección ocular, que la actora estaba en posesión de parte de la casa que se halla en "Los Alamos", la aceptación no le perjudica, porque la acción no se refiere a esa parte, pues si así fuera, la misma sería improcedente; y en cuanto a J. Leonor Sánchez, aun cuando dijo que a partir de febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro sembró el terreno, es absurdo tomar tal tiempo como el del despojo a que alude la actora, ya que según las demás pruebas, Rodrigo Albarrán prin

cipió a poseer los bienes a la muerte de su hermano Manuel, como se confirma con el hecho de que aquél permitió al codemandado Florentino Arriaga, ocupar parte de la casa en octubre de mil novecientos cincuenta y tres, todo esto, aparte de que la inspección ocular rendida por la actora no llenó su objetivo de identificar el - inmueble relacionado con la acción.

VII.- La responsable violó el artículo 211 del Código de Procedimientos Civiles, porque al igual que el Juez, concedió valor demostrativo a la testimonial de la actora, no obstante que con la misma no acreditó los extremos de su demanda ni, principalmente, la oportunidad del ejercicio de la acción, pues los testigos no dijeron fecha del despojo a que alude la demandante, ni supieron decir qué entendían por posesión a título de dueño, continua, pública y de buena fe, lo - que indica que fueron preparados para contestar afirmativamente, sin saber en realidad los hechos sobre que declararon; además, con tal prueba se trató de demostrar la posesión para prescribir, como así lo declaró el juez, no obstante no ser punto de la litis; a todo esto, la responsable expresa que el agravio relativo - es repetición de los anteriores, pero insistió en que la oportunidad de la demanda se justificó con la confesión de J. Leonor Sánchez y Rodrigo Albarrán, lo que - no es así, por las razones ya antes expuestas, que repiten; la Sala tácitamente concede razón a los demandados, al reconocer que el juez debió concretarse al estudio de la posesión que se perturba y no a la que es apta para prescribir, pero desechó el agravio respec-



- 13 -

tivo e incurrió en contradicción.

VIII.- Como consecuencia de las anteriores violaciones, infringió la Sala el artículo 241 del Código de Procedimientos Civiles, por la condena en costas, pues la confirmación de la sentencia obedeció a la incorrecta valoración de las pruebas.

TERCERO.- La sentencia apelada se fundó, en síntesis, en las siguientes consideraciones:

Las afirmaciones de los demandados, constitutivas de sus excepciones o defensas, son de las que no destruyen la acción ejercitada y deben estudiarse previamente, como lo dispone el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, las de Rodrigo Albarrán, en el sentido de que la propiedad y posesión de los inmuebles, a que se refiere la demanda, no corresponden a la actora, porque pertenecieron a Manuel Albarrán y éste se los dejó por ser su hermano, no se demostraron con las pruebas rendidas oportunamente en el juicio, - pues el auto que admitió la documental ofrecida por los demandados, se revocó y, por tanto, no se acreditó la propiedad en favor de Manuel Albarrán, que éste hubiese instituido heredero de sus bienes al demandado Rodrigo de igual apellido, ni que se le adjudicaron y ni siquiera que ambos fueron hermanos, para que pudiera concluirse el derecho de disponer del terreno y casa que la actora pretende recuperar. Además, respecto a la testimonial de los demandados, se advierte que al contestar -- los tres testigos la novena pregunta, dijeron que fue Rodrigo Albarrán quien, como dueño, recogió la cosecha del terreno "Los Alamos", en mil novecientos cincuenta

y tres, y valorizando el dicho con la facultad del artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles, se -- concluye que no hace fe, porque pretendió probarse con la pregunta el derecho de propiedad, cuando debe hacerse con documento público o privado. Contestaron los testigos a la pregunta sexta, que a la muerte de Loreto Rosas de Albarrán siguió poseyendo el terreno Manuel Albarrán; pero ante tal declaración está la confesión de Rodrigo en la contestación de la demanda, afirmando que la propiedad y posesión de los bienes correspondió a su hermano Manuel, quien las tuvo hasta su muerte, - sin atribuirle entonces derechos a Loreto **Rojas**, y esa confesión hace prueba en su contra, por lo que se concluye la falta de valor demostrativo de las declaraciones de los testigos y de la confesional a cargo de la actora, pues las posiciones son ineficaces e inconducentes a la cuestión debatida. En cambio, del estudio de las pruebas rendidas por Paz Nava viuda de Rojas, - para los fines del artículo 386 del Código de Procedimientos Civiles, aparece que Rodrigo Albarrán admitió en la inspección ocular, la posesión de la actora respecto a una parte de la casa construida en el terreno "Los Alamos", como lo afirmó en la demanda, y tácitamente también admitió tal posesión, al no objetar lo - que expresó el Delegado Municipal de San Mateo Capulhuac en la misma diligencia, sobre que la posesión de la actora era de más de treinta años. Por su parte el demandado J. Leonor Sánchez, al absolver posiciones, -- contradijo las manifestaciones de Rodrigo Albarrán en la inspección ocular, pues afirmó que a partir de febrero -



91

- 15 -

de mil novecientos cincuenta y cuatro, él -el absolverte-, entró en posesión del terreno en cuestión, por haberse la entregado Rodrigo, lo que éste corroboró al contestar posiciones, pero sin probar que desde tres años antes el propio Rodrigo había obtenido la posesión, como dijo al absolver la primera posición. En examen de la testimonial de la actora, se ve ^A las declaraciones de sus testigos son de ciencia cierta, porque en las repreguntas relacionadas con la ^B pregunta tercera, señalaron uniformemente las colindancias de "Los Alamos", coincidiendo con los datos de la ^C demanda y de la inspección ocular, y aunque no entendieron las repreguntas referentes a los atributos ^D técnicos de la posesión, esto no altera la esencia de lo que declararon. Por estas razones se estima que la ^E actora probó plenamente la posesión apta para prescribir, que mantuvo José Rojas en vida y siguió ejerciendo ella sobre los bienes objeto del juicio, máxime que los demandados admitieron esto último al formular ^F repreguntas. Con la diligencia de cotejo del acta relativa y los comprobantes de pago de impuesto predial, aportados por la actora, quedó demostrado su matrimonio eclesiástico con José Rojas, y que éste ^G fue hijo natural de Loreto Rojas, la cual cubrió dicho impuesto del terreno en disputa; administradas esas dos pruebas con la contestación de los testigos de la señora Nava viuda de Rojas, a la repregunta b) de la pregunta cuarta del interrogatorio respectivo, sobre que saben que Loreto Rojas vivió en "Los Alamos", queda demostrada la posesión apta para prescribir en favor de la actora, primero en unión de su esposo, posteriormente -

con Loreto Rojas y después sola, así como la certeza - del despojo, de que fué objeto por parte de los demandados, del terreno y de cinco cuartos y corral, construidos en aquél, por lo que debe declararse probada la acción y condenar a Rodrigo Albarrán, J. Leonor Sánchez y Florentino Arriaga, a restituir tales bienes a Paz Nava viuda de Rojas, no así al pago de daños y perjuicios, porque no se acreditaron, ni al de los gastos y costas, por no haber procedido con temeridad o mala fe; pero deben garantizar su abstención de perturbar la posesión - de la actora, con fianza de dos mil quinientos pesos.

En la sentencia reclamada la autoridad responsable estimó legalmente correcta la valorización de las pruebas que hizo el juez, inclusive, que la acción se ejercitó dentro del término del artículo 490 del Código de Procedimientos Civiles, y sólo aclaró, respecto a la inspección ocular, rendida por la actora, que el Delegado Municipal de San Mateo Capulhuac, intervino nada más con carácter informativo, y no fue esa prueba, - el único fundamento del fallo apelado; así como que en la acción interdictal, de recuperar la posesión, no hay por qué ocuparse de la propiedad o de la posesión plena; y la condena en costas la apoyó en el artículo 247 del Código de Procedimientos Civiles.

CUARTO.- Es fundado el primer concepto de violación, en cuanto se relaciona con los siguientes - consideraciones. Dispone el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, que "Al pronunciarse la sentencia se estudiarán previamente las excepciones que no - destruyan la acción, y, si alguna de éstas se declara - "procedente, se abstendrán los tribunales de entrar al



3226/957/2a.

- 17 -

"fondo del negocio, dejando a salvo los derechos del actor. Si dichas excepciones no se declaran procedentes, se decidirá sobre el fondo del negocio, condenando o absolviendo, en todo o en parte, según el resultado de la valuación de las pruebas que haga el juez". La interpretación de este artículo debe ser en el sentido de que son de estudio preferente las excepciones dilatorias, puesto que su función es sólo paralizar el curso o conocimiento de la acción, para cuando se cumpla determinada formalidad, plazo o requisito de competencia, y su efecto es absolver de la instancia, salvo que su decisión sea de previo pronunciamiento; por eso el artículo había de dejar a salvo los derechos del actor, cuando se declara procedente la excepción que no destruye la acción que, como se ha visto, es la dilatoria; las que sí la destruyen, que son las perentorias, persiguen evitar una condena total o parcial; de manera que si en el presente caso, los demandados no opusieron excepción alguna, la Sala responsable debió considerar que el Juez infringió el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, porque en lugar de estudiar, en primer término, la acción, se ocupó de la defensa de sine actione agis que, como lo hacen notar los quejosos, jurídicamente no es excepción, si no la negación de la demanda. El estudio previo de la acción, cuando no hay excepción dilatoria, se impone, en virtud de que quien la ejercita, es el primero que afirma y, por tanto, quien también debe probar en primer término, porque el artículo 269 del Código de Procedimientos Civiles establece, que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones. No

obstante lo anterior, este primer concepto de violación resulta inoperante, porque la autoridad responsable estudió y decidió, aunque invirtiendo el orden, la acción ejercitada, la defensa opuesta, las pruebas rendidas o sea, el fondo del negocio; no hubo, por tanto, la omisión alegada por los quejosos.

QUINTO.- Son infundados los conceptos de violación segundo, cuarto, quinto, sexto y séptimo, en cuanto sostienen los quejosos que el interdicto de recuperar la posesión, fué promovido extemporáneamente. Paz Nava viuda de Rojas afirmó en su demanda inicial, - que ella y su esposo José Rojas adquirieron los terrenos con que integraron el predio "Los Alamos" y a la muerte de éste continuó en la posesión que ambos tenían desde hacía más de quince años, pero a principios de febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro, los demandados - la despojaron del terreno y la mayor parte de la casa - construída en él. Ahora bien, el demandado J. Leonor Sánchez manifestó al absolver la primera posición que - le articuló la actora, que es cierto que a partir de febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro está en posesión del terreno a que se refirió el demandante y, según la absolución de la posición número dos, que la posesión se la entregó Rodrigo Albarrán. Este, al contestar la demanda expuso que en mil novecientos cincuenta y cuatro dió a dicho señor Sánchez el terreno "Los Alamos", a medias, para la siembra de avena, aunque indicó que fué en julio y no en febrero; de manera que si, como después se verá, no hay prueba de que los demandados tuvieron la

3226/957/2a. (34).



- 19 -

posesión del bien antes de dicho febrero, sino la actora, y ésta ejerció la acción interdictal el veintiocho de diciembre siguiente, se concluye que lo hizo dentro del año a que se refieren los artículos 804 del Código Civil y 490 del de Procedimientos Civiles.

SEXTO.- Dichos conceptos de violación segundo, cuarto, quinto, sexto y séptimo son infundados, en lo que no se refieren a la caducidad del ejercicio de la acción sino al sistema que siguió la autoridad responsable en la valoración de las pruebas, relacionándolas entre sí, y no en lo particular y que la condujo a confirmar el criterio del Juez, de que la actora probó su acción. La acción interdictal de recuperar la posesión requiere para su procedencia, la posesión pacífica de un bien raíz y el despojo que de él haya sufrido quien la ejercita, efectuado por el demandado; no es elemento de la misma, la prueba del derecho de propiedad del bien materia del despojo, porque en los interdictos de recuperar o retener, se versa únicamente el hecho de la posesión y su despojo, también es necesario, que la acción, si es de recuperar se intente dentro del año siguiente a los actos violentos o vías de hecho causantes del despojo, de acuerdo con los artículos 804 del Código Civil y 490 del de Procedimientos Civiles. El primer elemento quedó demostrado en el presente caso, como lo admitió la autoridad responsable, puesto que Mario Esteban Hernández y Metodio Colín Rubí, testigos de la actora, acordamente declararon al contestar las preguntas números cuatro y cinco del interrogatorio, que José Rojas y Paz Nava viuda de Rojas habían poseído el terreno a que se -

refiere la demanda, así como la casa en él construida, y que a la muerte de José, ella continuó en la posesión, constándoles, por haberlo visto y el primer testigo -- agregó, que por razón de vecindad; no incurrieron en -- contradicción a pesar de las repreguntas que se los formuló y aunque dijeron, uno, que no entiende qué es posesión de buena fe y el otro, que tampoco entiende eso, ni lo que es posesión pública y continua, los dos declararon el hecho substancial de la posesión de la actora. -- En cambio, los testigos de los demandados, sólo contestaron afirmativamente las preguntas relativas a si conocen a los demandados y a la actora; si conocieron a Manuel Albarrán y Loreto Rosas de Albarrán; si a la muerte de -- ésta siguió poseyendo Manuel Albarrán el terreno "Los -- Alamos", y si Rodrigo Albarrán en su calidad de propietario, recogió la cosecha de dicho terreno en mil novecientos cincuenta y tres; por tanto, sus testimonios resultan ineptos para demostrar, además de la extemporaneidad del ejercicio de la acción interdictal, la defensa opuesta de falta de acción. Por otra parte, el segundo elemento de dicha acción se demostró, porque si no hay prueba fehaciente de que los demandados tenían la posesión -- de "Los Alamos" y parte de la casa que allí existe, desde antes de que Rodrigo Albarrán diera en aparcería el terreno a J. Leonor Sánchez y otra parte de la casa a -- Florentino Arriaga; por tanto, se tiene que concluir que hubo el despojo, sin que obste que dicho Rodrigo fuera -- instituido heredero por Manuel Albarrán, toda vez que -- ello demostraría solo un derecho a la posesión, pero no -- ésta como hecho, de acuerdo con el artículo 1704 del Cód-

3226/957/2a.

(34)



- 21 -

digo Civil; y la forma defectuosa en que se practicó - la inspección ocular al predio "Los Alamos" y a la casa, en cuya diligencia el Delegado Municipal de San Mateo Capulhuac, aparte de identificar esos bienes, manifestó que la actora Paz Nava viuda de Rojas ha vivido allí durante treinta y cinco años, no obsta, porque como consideró la autoridad responsable, esa prueba no - fué la base fundamental de la sentencia del Juez y por esto, el tercer concepto de violación resulta infundado. Además, como de lo expuesto se deduce que fué arreglado a derecho, que la autoridad responsable confirmara la sentencia del Juez, la condena en costas para los demandados, que acordó en la apelación, encuentra apoyo correcto en el artículo 241 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que es también infundado el octavo concepto de violación.

De lo anterior resulta que la autoridad responsable no infringió las leyes ordinarias aducidas por los quejosos, ni violó los artículos 14 y 16 de la Constitución, y debe negarse el amparo de la Justicia Federal.

Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 103-I y 107-I, II, III y V de la Constitución General 45, 158 y 190 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal y 26-III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

UNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rodrigo Albarrán y J. Leonor Sánchez, contra el acto que reclamaron de la Primera Sala del Tri-

bunal Superior de Justicia del Estado de México, consistente en la sentencia que pronunció el día veintisiete de marzo de mil novecientos cincuenta y siete, en el toca a la apelación del juicio ordinario civil seguido por Paz Nava viuda de Rojas, contra los quejosos y Florentino Arriaga.

Notifíquese; publíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos a la autoridad responsable y, en su oportunidad archívese el expediente.

ivt.

Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos, habiendo sido relator el señor Ministro Lic. - Mariano Ramírez Vázquez.

Firman los señores Presidente y Ministros que la integran con el Secretario que autoriza, y da fe.

EL PRESIDENTE DE LA SALA


Lic. Gabriel García Rojas.

LOS MINISTROS:


Lic. Mariano Ramírez Vázquez.


Lic. José Castro Estrada.


Lic. José López Lira.


Lic. Manuel Rivera Silva.

EL SRIO. DE ACUERDOS DE LA SALA


Lic. Angel Morales Moreno.



6 MAY 1959

Forma A. Núm. 53

En..... por lista de la misma fecha, se
notificó la resolución anterior a los interesados
y al Ministerio Público Federal.

3226/7

